



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Valledupar, veintisiete (27) de febrero de dos mil veinte (2020)

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
(SEGUNDA INSTANCIA – ORALIDAD)

DEMANDANTE: RICARDO ALEJANDRO BAZANTE

DEMANDADA: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO

RADICADO: 20-001-33-33-005-2018-00335-01

MAGISTRADA PONENTE: DORIS PINZÓN AMADO

I.- ASUNTO.-

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, de fecha 21 de agosto de 2019, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

II.- ANTECEDENTES. -

Sirven de antecedentes fácticos y jurídicos a la decisión adoptada en primera instancia, los siguientes:

2.1.- HECHOS. -

Se manifestó en la demanda que el señor RICARDO ALEJANDRO BAZANTE le fue reconocida pensión de jubilación por parte del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por tener los requisitos de edad y tiempo de servicio.

Indicó que al momento del retiro definitivo del cargo de docente, la entidad en su base de liquidación pensional, omitió incluir la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios.

2.2.- PRETENSIONES. -

En primera medida, en el proceso que nos ocupa se solicitó que se declarara la nulidad parcial del acto administrativo a través del cual se reconoció la pensión de jubilación al demandante.

Como consecuencia, se declare la nulidad total del acto administrativo contenido en el silencio administrativo ficto negativo, elevada la petición a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de Magisterio.

A título de restablecimiento del derecho, pide que se dé el reconocimiento y pago de reliquidación de la pensión vitalicia de jubilación, y se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a que incluya en la liquidación de la pensión del actor, los factores salariales devengados en el año anterior a aquel en el cual adquirió su estatus.

De otro lado, que se ordene el reconocimiento y pago de intereses moratorios a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta que se cumpla la condena.

2.3.- ACTUACIÓN PROCESAL. -

2.3.1.- ADMISIÓN: La demanda fue admitida mediante auto de fecha 29 de agosto de 2018¹, siendo debidamente notificada a las partes intervinientes y al Ministerio Público.

2.3.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

La NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO no se pronunció al respecto de los hechos esbozados en la demanda.

2.3.3.- AUDIENCIA INICIAL: El 21 de agosto de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el numeral 1° del artículo 180 del C.P.A.C.A., fecha en la cual se adelantaron todas las actuaciones respectivas.

2.3.4.- PRUEBAS: Con el objeto de establecer los hechos y la presunta responsabilidad que recae sobre la entidad demandada, al proceso fueron allegados los elementos probatorios que se describen a continuación.

- Fotocopia simple del acto administrativo demandado y sus antecedentes administrativos (v.fl.s.2-5).
- Formato único para la expedición de certificados de salarios consecutivo, anexando horas extras (v.fl.6 reverso).
- Fotocopia de oficio expedido por la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar el 27 de agosto de 2019, en el que se certifica que se efectuaron descuentos para seguridad social a las horas extras devengados por el demandante (v.fl.75).

2.3.5.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

La parte demandante presentó alegatos de conclusión en audiencia, ratificando los argumentos expuestos en el transcurso del proceso.

El apoderado judicial de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, presentó alegatos de conclusión en la audiencia, manifestó que se opone a todas las pretensiones de la demanda por carecer de sustento fáctico y jurídico, debido a que los actos administrativos se encuentran cobijados por la presunción de legalidad y la parte accionante no prueba que estos hayan infringido las normas de forma irregular o sin ajustarse a derecho.

¹ Folio 35 (reverso)

Arguye que la liquidación de la pensión en la resolución que es objeto de controversia se ajusta a la Ley 33 de 1985, en concordancia con el Decreto 3752 de 2003, razón por la que su petición de incluir los demás factores salariales no se encuentra fundada en derecho; resalta que se debe tener en cuenta el principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones.

2.3.6- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. -

En esta oportunidad procesal, el Agente del Ministerio Público no emitió concepto.

III. SENTENCIA APELADA.-

El JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, en sentencia de fecha 21 de agosto de 2019, negó las peticiones de la demanda con base en los siguientes argumentos:

Aseguró que el régimen aplicable en este caso, era el establecido en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 y en la Ley 62 de 1985, que enlistan los factores salariales, lo que permite concluir que la liquidación reconocida no se ajusta a esos parámetros mencionados.

En vista de lo anterior, se concluyó que no había lugar a ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación solicitada por la parte actora, ya que no se acreditó que se hubieran realizado los aportes respectivos, frente a los factores salariales que se pide se tengan en cuenta a la hora de calcular la mesada correspondiente.

Cabe destacar, que en la providencia apelada no se impuso condena en costas.

IV. RECURSO INTERPUESTO.-

La apoderada judicial de la parte demandante manifestó su desacuerdo con la providencia recurrida, reiterando los argumentos expuestos en el transcurrir del proceso, por lo que considera que resulta procedente la reliquidación de la pensión reconocida al demandante, de conformidad con las normas especiales aplicables a los docentes.

Aunado a lo anterior, indicó que se vulneró notablemente el principio de progresividad y no regresividad de los derechos pensionales de la demandante.

V.- ACTUACIÓN PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA.-

El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, mediante auto de fecha 6 de noviembre de 2019, admitió el recurso interpuesto contra la sentencia proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR de fecha 21 de agosto de 2019, y ordenó notificar personalmente al Agente del Ministerio Público y por estado a las partes.

Por medio de auto de fecha 29 de noviembre de 2019, se ordenó correr traslado a las partes por el término común de 10 días para alegar de conclusión y una vez vencido el término anterior, por 10 días al Ministerio Público que emitiera su concepto.

5.1.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. -

La parte demandante presentó alegatos de conclusión, ratificando los argumentos expuestos en el transcurrir del proceso, la parte demandada presentó alegatos de conclusión de manera extemporánea.

5.2.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO. -

El Agente del Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia.

VI. CONSIDERACIONES.-

Surtidas las etapas procesales previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para la instancia, procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, de fecha 21 de agosto de 2019, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

6.1.- COMPETENCIA.-

La Corporación es competente para conocer el recurso de apelación propuesto en contra de la sentencia proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, es decir, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.²

6.2.- FIJACIÓN DEL LITIGIO.-

De acuerdo con los hechos expuestos en el escrito de apelación y las alegaciones presentadas en esta instancia, corresponde a esta Corporación determinar si en el presente caso resulta procedente o no la reliquidación de la pensión de jubilación del señor RICARDO ALEJANDRO BAZANTE, incluyéndose dentro del ingreso base de liquidación la totalidad de factores salariales devengados durante el último año de servicio, independientemente de que éstos hayan servido de base para la cotización en pensiones, o que se encuentren incluidos taxativamente en la ley.

Lo expuesto, con el fin de concluir si la sentencia proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, debe ser confirmada o revocada.

6.3.- CUESTIÓN PREVIA.-

El artículo 18 de la Ley 446 de 1998, establece los requisitos para determinar la prelación para dictar sentencia, lo que implica que resulta obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal.

Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público, en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.

² Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

Atendiendo entonces la naturaleza de este caso, en el que se discuten asuntos relativos a seguridad social en pensiones, se procederá a emitir la sentencia correspondiente, modificando el orden de los procesos que se encuentran en turno para fallo.

6.4.- CASO CONCRETO.-

En primera medida, esta Sala de Decisión revocará la providencia recurrida, ya que comparte los argumentos expuestos por la parte recurrente, quien solicita que se reliquide la pensión de jubilación de su prohijado, incluyéndosele solamente el factor denominado horas extras, ya que se pudo verificar que si se realizó el respectivo aporte y/o descuento al sistema de seguridad social frente a dicho factor, el cual a su vez devengó durante el último año de servicios.

Al respecto, la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr. César Palomino Cortés, emitió la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019, de fecha 25 de abril de 2019, dentro del expediente 680012333000201500569-01 en la que plasmó las reglas de unificación sobre el IBL en pensión de jubilación y vejez de los docentes, en el siguiente sentido:

- De acuerdo con el párrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, y se deben tener en cuenta las siguientes reglas:
- En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
- Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Al pronunciarse respecto a los efectos de la aludida decisión, se indicó:

- La Corte Constitucional, en sentencia C-816 de 2011, estableció que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte Constitucional - como guardiana de la Constitución -, tienen valor vinculante por emanar de órganos

diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la Constitución Política. Por lo tanto, su contenido y la regla o norma jurídica que exponen, tienen características de permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio.

- Se acudió al método de aplicación en forma retrospectiva del precedente, disponiendo para ello, que las reglas jurisprudenciales que se han fijado en este pronunciamiento se acojan de manera obligatoria en todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
- Los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.
- No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado a partir de la sentencia de 4 de agosto de 2010, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada.

De lo anterior, resulta factible realizar las siguientes conclusiones:

El artículo 1 de la Ley 33 de 1985 estableció que el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años, tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

Por su parte, el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, definió que la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, se indicó que las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.

Esta posición fue ratificada por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr. César Palomino Cortés, en la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019, de fecha 25 de abril de 2019, enunciada previamente, en la que se concluyó que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los docentes son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

Cabe destacar, que lo expuesto tuvo como fundamento que la posición adoptada el 4 de agosto de 2010 por el H. Consejo de Estado, iba en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación advierte que es procedente la reliquidación de la pensión en los términos requeridos por la demandante, revisado el contenido de la Resolución No. 000328 de 28 de enero de 2013 se observa que en la liquidación de la mesada pensional reconocida al actor se omitió incluir lo percibido por éste por concepto de horas extras, factor que se encuentra enlistado en la ley y sobre el cual se demostró se realizaron aportes a la seguridad social.

Al respecto, en el expediente obra la fotocopia del oficio expedido por la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar el 27 de agosto de 2019, en el que se certifica que se efectuaron descuentos para seguridad social sobre las horas extras devengadas por el demandante (v.fl.75).

En razón a lo expuesto, y al constatar que se cumplen los presupuestos exigidos en la sentencia de unificación citada previamente, se accederá parcialmente a lo pretendido por la parte actora, y como consecuencia de ello, se declarará la nulidad parcial del acto demandado, en cuanto a la forma de integrar el ingreso base de liquidación, dentro del cual deberá incluirse lo percibido por concepto de horas extras.

Se precisa que en cumplimiento de lo resuelto en este fallo, la entidad accionada deberá reconocer y pagar al actor las diferencias que se registren entre el valor inicialmente liquidado por concepto de mesada pensional y aquel que resulte de reliquidar la prestación conforme a los parámetros aquí señalados.

Respecto de las sumas que deberán ser reconocidas al demandante en cumplimiento de lo resuelto en esta sentencia, se deberá aplicar la siguiente fórmula que ha sido debidamente sustentada por el H. Consejo de Estado y que tiene por objeto traer a valor presente las diferencias que dejó de recibir la demandante en aras de proteger sus intereses de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

$$R = \frac{R_h \times \text{Índice Final}}{\text{Índice inicial}}$$

Según la cual el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de diferencias en sus mesadas pensionales desde la fecha en que se reconoció la prestación, incluyendo todos los factores, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho periodo.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula deberá aplicarse separadamente mes por mes, para cada mesada pensional teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos, la fórmula se aplicará hasta cuando quede ejecutoriada ésta sentencia, pues en adelante se pagarán los intereses establecidos en el artículo 192 del CPACA.

Finalmente, debe destacarse que debido a que entre la fecha de reconocimiento de la pensión de jubilación (28 de enero de 2013) y la de presentación de la demanda (23 de agosto de 2018), transcurrió un término superior a los tres años establecidos

para la prescripción de los derechos conforme a lo previsto en los artículos 42 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, deberán declararse prescritas las diferencias pensionales no reclamadas oportunamente, por lo que es claro que el demandante sólo se verá favorecido con las diferencias pensionales causadas a partir del 23 de agosto de 2015.

En consecuencia, la efectividad de la condena impuesta en esta providencia, deberá liquidarse a partir del 23 de agosto de 2015 en adelante, sin perjuicio que la reliquidación se efectúe a partir de la fecha de reconocimiento de la prestación, por la incidencia que tiene esa operación hacia futuro en el valor a ser cancelado por concepto de pensión de jubilación.

6.5.- DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA. -

De conformidad con lo expuesto, esta Corporación REVOCARÁ la sentencia proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, de fecha 21 de agosto de 2019, en la que se negaron las súplicas incoadas en la demanda de la referencia.

6.6.- CONDENAS EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO. -

Al respecto, la Sala de Decisión acudirá al de causación, en la medida que el artículo 188 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo³, impone al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del Código General del Proceso⁴.

En este orden, la Sala observa que al efectuar la valoración de las pruebas obrantes en el proceso, no existe ninguna que sugiera causación de expensas distintas a los gastos ordinarios del proceso, que son completa responsabilidad del demandante, razón que al margen de la conducta de las partes, sugiere que no procede su imposición al vencido, por lo que no se condenará en costas en este proceso.

³ «Artículo 188. CONDENAS EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se registrarán por las normas del Código de Procedimiento Civil.»

⁴ «Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.» (Subrayado fuera del texto original).

DECISIÓN.-

En mérito de lo expuesto, esta Sala de Decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR, de fecha 21 de agosto de 2019, en la que se negaron las súplicas incoadas en la demanda de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 000328 de 28 de enero de 2013 proferida por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CESAR (actuando en nombre y representación de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO), en cuanto en ella se omitió incluir dentro de la base de liquidación de la mesada pensional reconocida al señor RICARDO ALEJANDRO BAZANTE, el factor de horas extras percibido, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión.

TERCERO: En consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DEL CESAR (actuando en nombre y representación de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO), RELIQUIDAR la pensión de jubilación reconocida a favor del señor RICARDO ALEJANDRO BAZANTE, incluyendo dentro del ingreso base de liquidación el factor de horas extras percibido durante el último año que prestó sus, aplicando la correspondiente prescripción trienal.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CESAR (actuando en nombre y representación de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO), RECONOCER Y PAGAR a favor del señor RICARDO ALEJANDRO BAZANTE, las diferencias que se presenten entre el monto de la mesada pensional reliquidada y aquel que le fue cancelado al demandante, con efectividad a partir del 23 de agosto de 2015, por aplicación de la prescripción trienal.

Estas sumas deberán ser canceladas debidamente indexadas, de conformidad con la siguiente fórmula:

$$R = R.H. \frac{\text{Índice Final}}{\text{Índice Inicial}}$$

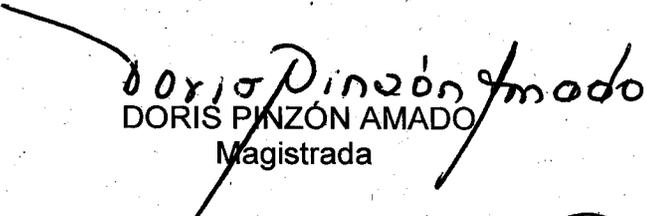
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por la parte demandante desde la fecha a partir de la cual se originó la obligación, por la suma que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente en la fecha de ejecutoria de ésta sentencia), por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se debe aplicar en forma separada mes por mes, para cada diferencia pensional teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de causación de cada uno de ellos.

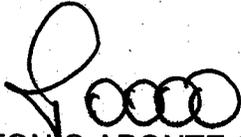
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia

SEXTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Este proveído fue discutido y aprobado en reunión de Sala de decisión efectuada en la fecha. Acta No. 025.


DORIS PINZÓN AMADO
Magistrada


JOSÉ ANTONIO APONTE OLIVELLA
Presidente


OSCAR IVÁN GASTANEDA DAZA
Magistrado